



E

Editorial

Agresión a ministra Ximena Lincolao

El repudio y la sanción a los responsables son acciones indispensables para proteger los campus de toda violencia.

El rechazo transversal que provocó la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral, es un signo positivo sobre la poca tolerancia que existe en la ciudadanía y gran parte del arco político frente a situaciones de violencia en el espacio público. Refuerza esta percepción el fuerte repudio que provocó el intento de la Federación de Estudiantes de la UACH por defender la manifestación hecha por algunos alumnos en un tono que, si bien condena la agresión, no contiene ninguna autocrítica ni compromiso frente a un hecho que no puede volver a repetirse en ningún campus universitario del país. El incidente, que con seguridad marcará la relación del gobierno de José Antonio Kast con el movimiento universitario, debe ser investigado en profundidad y sus instigadores y ejecutores, sancionados de manera que no exista espacio para nuevos casos de similares características en otros espacios universitarios. No se trata de amedrentar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, sino de expulsar la violencia de todos los lugares formativos en la educación superior como una forma de proteger los derechos que tiene toda persona que acuda a esos espacios, sea alumnos, académico, autoridad o invitado. Esto adquiere particular importancia para una ciudad como Valparaíso, que en periodos de gobierno como el actual suele sufrir masivas movilizaciones estudiantiles, que a menudo terminan con actos de violencia y destrucción del espacio público. En ese sentido, la persecución de los responsables y las querellas interpuestas por el Ministerio del Interior son señales positivas de que el Gobierno no dará ningún margen para expresiones de violencia en las manifestaciones universitarias y contrastan con el silencio de algunas federaciones estudiantiles locales frente a hechos que siempre deben concitar repudio y sanción. Proteger a las universidades de la irracionalidad que a veces domina el debate público es una tarea de todos y un imperativo mayor este año que dichas comunidades estarán sometidas a los tironeos de grupos -siempre minoritarios- más interesados en imponer sus puntos de vista que en abrir espacios de debate y deliberación en torno a los temas urgentes que debe resolver un sistema con señales de crisis.